



Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE TUCUMAN 1

15816/2023

S. M. de Tucumán, de mayo de 2024.- MCV

Y VISTOS: Para resolver en los autos caratulados: " COOPERATIVA FARMACEUTICA DE PROVISION Y CONSUMO ALBERDI L.T.D.A. c/ A.F.I.P. s/AMPARO LEY 16.986"; Expte N°15816/2023, y

CONSIDERANDO:

En fecha 28/11/2023 se presenta el Dr. Leandro Stok como apoderado de Cooperativa Farmacéutica de Provisión y Consumo Alberdi Ltda, (COFARAL) indicando que es una cooperativa de provisión y consumo de productos farmacéuticos – droguería - y, como tal, se encuentra regida por las prescripciones de la ley 20.337.

Especifica que, en razón de la actividad desarrollada, se encuentra sujeta al Impuesto sobre los Débitos y Créditos establecido por la ley 25.413, y el art. 7 inc. a, punto IV del decreto 380/01 (reglamentario de la ley 25.413) que le reconoce un beneficio por el cual el alícuota general del gravamen queda reducida a 0,75 centésimos por mil para los créditos.

Por su parte, la R.G. 3900 de A.F.I.P. estableció que los sujetos que se encuentren exentos o alcanzados por la reducción de



#38477088#414194386#20240530114404156

la alícuota en el impuesto sobre los débitos y créditos en las transacciones financieras deberán inscribir las cuentas bancarias a las cuales se debe aplicar el beneficio en el “Registro de Beneficios Fiscales en el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias” que el mismo organismo instituyó a tal efecto.

Aduce que COFARAL se encontraba inscripta en dicho registro, pero el día 17/11/2023 advierte que fue excluido del mencionado régimen y, por consiguiente, de ello, la alícuota reducida quedó eliminada, quedando sometida a la alícuota del 6%, todo ello ocurrió sin haber tomado ningún tipo de conocimiento previo de razón alguna por parte de la A.F.I.P.

Considera que se trata claramente de una vía de hecho de la Administración, toda vez que procedió a excluir a su mandante de un beneficio, no solo sin haberle previamente notificado de ello, sino sin siquiera haberle conferido un mínimo de posibilidad de que ejerciera su derecho de defensa.

Explica que la propia AFIP en su R.G. 3900/2016 dispone que, de constatarse que no se verifica una correcta conducta fiscal (como aduce AFIP), el organismo procederá a comunicar la exclusión del “Registro” o, en su caso, a intimar al contribuyente el cumplimiento de las obligaciones que configuran falta de correcta conducta fiscal mediante notificación en su “Domicilio Fiscal Electrónico” – ver art. 10 de la R.G. 3900/2016 -, cosa que no ocurrió en el caso, pues COFARAL no fue notificado de que habría de ser excluido, mucho menos fue





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE TUCUMAN 1

intimado a que diera cumplimiento de ninguna inconducta fiscal por la sola razón de que ni siquiera le fue informada cuál habría sido la supuesta inconducta que habría acarreado la sanción.

Agrega que el art. 10 de la citada resolución general dispone que en dicha notificación se detallarán los incumplimientos detectados y, de corresponder, se otorgará un plazo de DIEZ (10) días para su regularización. La falta de cumplimiento de la intimación efectuada producirá, sin más, la exclusión del “Registro”.

Señala que la pérdida del beneficio es una sanción, que no opera ipso iure mediante la misma notificación de que se habrían incumplido en forma pretérita las condiciones para el goce del beneficio, por lo que la Administración debe, primero notificar el incumplimiento y, a posteriori de que el mismo quede firme, desencadenar los efectos que son su consecuente – art. 21 de la ley 19.549 – sin que esto haya ocurrido en el caso de autos, menos aún existe ningún acto administrativo previo que informe la caducidad del beneficio.

Precisamente, en este sentido, el art. 21 de la ley 19.549 dispone que en la caducidad se requiere la imputación del incumplimiento a título de dolo o culpa, como condición para el ejercicio de la potestad rescisoria. La declaración de caducidad, como modo extintivo del acto administrativo, debe ajustarse a los requisitos de mora, plazo suplementario vencido y culpa del interesado.

Por último, agrega que el Estado Nacional y todos sus organismos se encuentran sujetos al principio de legalidad, por lo



que su comportamiento debe circunscribirse a lo que la ley prescribe.

En fecha 18/12/2023, se presenta el Dr. Álvaro Ramasco Padilla como representante del Fisco Nacional (AFIP–DGI), y contesta informe del Art. 8 ley 16.986.

Procede a efectuar la negativa de ley sobre los hechos narrados por el amparista y a continuación describe su propia versión de los hechos.

Solicita que se rechace la acción de amparo deducida por resultar manifiestamente improcedente, al no existir arbitrariedad ni ilegalidad alguna en el accionar de su mandante y también en razón de verse comprometido el desarrollo de actividades esenciales del Estado, como la recaudación de recursos públicos.

Interpone la caducidad de la acción de amparo que dispone el art. 2 inc. e) de la Ley de Amparo N° 16.986 por incumplir el plazo de 15 (quince) días allí especificados.

Explica que la actividad llevada cabo por la Administración Federal de Ingresos Públicos tiene fundamento en la Constitución de la Nación en su artículo 4, en el Decreto N°618 /97 y demás normas concordantes; a su vez, el Congreso de la Nación Argentina, en pleno ejercicio de las facultades a él conferidas por nuestra carta magna, sancionó la Ley de Procedimiento Fiscal N°11.683 dictando el marco jurídico de la relación fisco-contribuyente, por lo que se faculta a la





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE TUCUMAN 1

Administración para realizar las fiscalizaciones y verificaciones que considere pertinentes para encauzar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte del contribuyente.

Señala que para el caso concreto, la RG N°3900/16 en su art. 9 dispone: “...La permanencia de la inscripción en el “Registro” estará condicionada a que el contribuyente observe una correcta conducta fiscal, considerando que dicha condición no se cumple cuando se verifique alguna de las situaciones que se detallan en el micrositio denominado “Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y otras Operatorias” obrante en el sitio “web” institucional del Organismo...”. Por su parte, el art. 10 sostiene: “...De constatarse que no se verifica dicha condición -correcta conducta fiscal- este Organismo procederá a comunicar la exclusión del “Registro” o, en su caso, intimar al contribuyente al cumplimiento de las obligaciones que configuran falta de correcta conducta fiscal mediante notificación en su “Domicilio Fiscal Electrónico”, por lo que la actora debió haber cuestionado en las formas y por las vías procesales correspondientes.

Indica que, conforme surge del análisis efectuado por la División Revisión y Recursos, la inspeccionada hizo extensivo el beneficio de reducción de la alícuota del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias, a movimientos bancarios vinculados a otra actividad económica: “venta al por mayor de productos cosméticos, de tocador y perfumería”, por lo que la situación de COFARAL, encuadra en la causal de exclusión del



registro, al detectarse un uso indebido de cuentas bancarias en relación con el impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias.

Señala que es por ello que en un primer momento se inició una fiscalización en la División de Fiscalización N° 1 donde se emitió un informe técnico que se encuentra agregado a fs. 03/15, de conformidad a lo actuado en el marco de la OI N.º 1898910. En dicho informe, se dejó sentado que: “...El presente caso se origina en Nota 496/2019 de División Revisión y Recursos, con motivo del análisis efectuado por esa División en función a una solicitud de devolución del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias presentada por la inspeccionada, correspondiente al período 08/2018, la cual fue rechazada mediante Resolución 01/2019 (DV RRTU), siendo la misma recurrida por la contribuyente y nuevamente rechazada mediante la Resolución 299/2019 (DI RTUC)...” (cuyo trámite judicial se encuentra radicado en el Juzgado Federal N°2 de Tucumán).

La presente fiscalización se inició el 25/01/2021 procediéndose a confeccionar el F.8000/I N°0140002021002577707, notificado mediante el sistema de publicador en el domicilio fiscal electrónico de la inspeccionada. Además, se le cursó requerimiento impositivo F.8600/I N°0140002021002579904, solicitándole a la contribuyente aportar documentación respecto de los períodos comprendidos entre 09/2016 y el 07/2019.

La notificación se efectuó el 02/02/2021. A través de una presentación digital de fecha 01/03/2021, la firma solicitó





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE TUCUMAN 1

extensión al plazo para dar cumplimiento a lo requerido, el que fue concedido, habiendo cumplido en fecha 12/03/2021 a través de una multinota.

Adicionan los verificadores que, mediante mail del 16/03/2021 se solicitó a la División Revisión y Recursos, copia de la Resolución N°299/2019 (DI RTUC) del 01/11/2019, donde la Dirección Regional Tucumán rechazó el recurso de apelación interpuesto por la contribuyente para la devolución del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias, correspondiente al período 08/2018, judicializando el litigio antes mencionado en los autos caratulados “COOPERATIVA FARMACÉUTICA DE PROVISIÓN Y CONSUMO ALBERDI C/AFIP – DGI S/ Repetición” Expte. N° 29.676/19 el cual, hasta ese momento no tenía resolución, ni medida cautelar que ordenara suspender la fiscalización.

Con fecha 05/07/2016 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución General AFIP N° 3900/2016 que en su artículo 1° establece: “A los fines del usufructo de los beneficios de exención y /o reducción de la alícuota del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y otras Operatorias (...) los sujetos que realicen las operaciones alcanzadas por el mencionado tributo deberán inscribir las cuentas bancarias y cuentas de pago definidas en los términos de la Comunicación “A” 6885 del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA a las cuales les resultan aplicables dichos beneficios, en el “Registro de Beneficios



Fiscales en el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y otras Operatorias” que se crea mediante la presente, en la forma y condiciones que se disponen en los artículos siguientes”.

A su vez, el artículo 9° de la RG 3900/2016 (AFIP) expresa: “La permanencia de la inscripción en el "Registro" estará condicionada a que el contribuyente observe una correcta conducta fiscal, considerando que dicha condición no se cumple cuando se verifique alguna de las situaciones que se detallan en el micrositio denominado "Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y otras Operatorias" obrante en el sitio "web" institucional de este Organismo”. Al respecto, en el apartado “Permanencia” del micrositio mencionado en el párrafo precedente, se establece que para la permanencia en el Registro se deberá mantener una correcta conducta fiscal, caso contrario se procederá a comunicar la exclusión o a intimar al ciudadano al cumplimiento de las obligaciones que configuran la falta de la misma mediante notificación en su Domicilio Fiscal Electrónico, la exclusión del Registro implicará que el agente de percepción y liquidación aplique la alícuota general del impuesto respecto de las operaciones realizadas en las cuentas bancarias excluidas.

La inspeccionada se encuentra en el Registro de Beneficios Fiscales Imp. Sobre Créditos y Débitos en Ctas. Bancarias, en estado activo y vigente desde el 20/09/2016, sin embargo, la fiscalizada se encontró en estado “Excluido” del beneficio de reducción de alícuota en el Impuesto, desde 15/07/2018 al 08/08/2018 por un incumplimiento formal, razón por la cual, en tal período tributó la alícuota general de 6 por mil y perdió





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE TUCUMAN 1

el beneficio de la citada reducción, ello motivó que una vez regularizado el mismo solicite la devolución.

Aduce que de la lectura de la Resolución 01/2019 y de la Resolución 299/2019, emanadas de la División Revisión y Recursos de esta Dirección Regional Tucumán, resulta que la solicitud de devolución del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias presentada por la inspeccionada, correspondiente al período 08/2018, fue rechazada por cuanto una de las actividades que desarrolla es la venta de productos cosméticos, de tocador y perfumería, los cuales no están considerados como productos de droguería y por tanto, no están alcanzados por la reducción de alícuota del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios, eludiendo, de esta manera, el pago del impuesto que se abonaría si los clientes en lugar de depositar en las cuentas bancarias de COFARAL lo hicieran en las cuentas bancarias de las respectivas farmacias, no constituyendo ésto un hecho aislado, sino que forma parte de un sistema organizado y desarrollado por la amparista en forma constante y habitual, durante la totalidad de los periodos bajo fiscalización.

Informa que con fecha 26/05/2022 los funcionarios actuantes se apersonaron en el domicilio fiscal de la firma donde se procedió a notificar a la contribuyente la determinación efectuada por AFIP haciéndole entrega de los papeles de trabajo confeccionados al respecto, y otorgando un plazo de 10 (diez) días para que se pronuncie la contribuyente, vencido el mismo y mediante presentación digital del 10/06/2022 COFARAL respondió “...ponemos en su conocimiento que esta Cooperativa ha



decidido no prestar conformidad al ajuste propuesto...” sin brindar mayores aclaraciones.

Cita el artículo 9° de la RG 3900/2016 (AFIP) que reza: “... La permanencia de la inscripción en el "Registro" estará condicionada a que el contribuyente observe una correcta conducta fiscal, considerando que dicha condición no se cumple cuando se verifique alguna de las situaciones que se detallan en el micrositio denominado "Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y otras Operatorias" obrante en el sitio "web" institucional de este Organismo...”. Al respecto, en el micrositio mencionado, en el apartado “Permanencia” del párrafo precedente, se establece que: “...Para la permanencia en el Registro se deberá mantener una correcta conducta fiscal. Caso contrario, se procederá a comunicar la exclusión o a intimar al ciudadano al cumplimiento de las obligaciones que configuran la falta de correcta conducta fiscal, según corresponda, mediante notificación en su Domicilio Fiscal Electrónico...”. (...) La exclusión del Registro implicará que el agente de percepción y liquidación aplique el alícuota general del impuesto respecto de las operaciones realizadas en las cuentas bancarias excluidas del beneficio.

En este caso el Organismo en uso de sus facultades de verificación y fiscalización conferidas por ley, estimó que la amparista incurrió claramente en la causal de exclusión contemplado en la norma.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE TUCUMAN 1

Que vienen los autos a despacho para resolver correspondiendo, en primer término, determinar la procedencia de la vía incoada y el planteo de extemporaneidad interpuesto por el demandado.

A los fines de determinar la procedencia de la vía incoada, atento a lo dispuesto en el Art. 43 de la C.N.: “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo” en este sentido, el Alto Tribunal mantiene el criterio de excluir la acción cuando por las circunstancias del caso concreto se requiere mayor debate y prueba y, por tanto la afectación de los derechos y garantías constitucionales no se da con “arbitrariedad o ilegalidad manifiesta” (Fallos: 327:2459; 330:1279), pero junto a estas características que se requieren para su admisión, también se ha exigido que los jueces efectúen un examen atento y circunstanciado de las constancias de la causa para determinar si es procedente rechazar la acción.

En el caso concreto, la cuestión a resolver no requiere de un análisis amplio y profundo de la prueba presentada, atento a que la dilucidación del caso se limita a determinar si el accionar de AFIP (exclusión del Registro de Beneficios Fiscales en el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y otras Operatorias creado por Resolución General AFIP N° 3900), se encuentra o no legitimado por la normativa legal vigente, en conformidad al principio de legalidad que inviste el actuar de la administración pública, de modo que desestimar el amparo en virtud de la exigencia de mayor debate y prueba sería aplicar un



criterio excesivamente formalista, descalificado por la Corte (Cam. Cont. Adm. Sala IV, “Arte Radiotelevisivo SA c/Estado Nacional s/ amparo ley 16.986” sentencia del 6706/13).

En cuanto al planteo de caducidad de la acción de amparo por haber vencido el plazo de quince días previsto en el art. 2 inc. e) de la ley 16.986, corresponde establecer que, luego de la reforma de la Constitución Nacional, se ha cuestionado la vigencia de dicha norma toda vez que la Carta Magna impone la vía del amparo en forma rápida y expedita lo que supone eliminar las trabas para el acceso a la justicia. Por tal razón, el suscripto comparte el criterio sostenido por Rivas, (Rivas, Adolfo A. “El plazo de caducidad en el amparo” LL 1/6/00) en cuanto señala que: “La reforma constitucional obliga a tramitar el amparo en forma rápida y expedita lo que significa que no está sometida a condicionamiento alguno, de modo que el art. 2º inc. “e” de la ley 16.986 y con ello el plazo de caducidad se derrumba estrepitosamente. En efecto, la Constitución no hace ninguna salvedad al respecto y un amparo expedito no se compadece con un lapso tan exiguo como el referido en dicha norma”.

Ingresando a la resolución del planteo de fondo, corresponde determinar si la actuación de la Administración se considera ajustada a derecho o puede vislumbrarse un eventual ejercicio desmedido de los mismos.

Para ello corresponde la revisión detallada de la documentación presentada por las partes a los fines de determinar si realmente existió una vía de hecho de la administración, prohibida por el Art. 9 de la ley 19.549, que implique la existencia





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE TUCUMAN 1

de conducta arbitraria o ilegítima por parte de la administración, o si el organismo ha actuado dentro de los límites de su competencia, atento que se trata de una fiscalización donde ya han surgido diversos planteos litigiosos y dado el largo periodo de tiempo que conlleva la investigación efectuada, que incluye los periodos fiscales que van desde el año 2016 hasta el año 2019, existiendo una exclusión de la contribuyente del registro y su posterior reinserción en forma previa al inicio de la presente acción de amparo.

Las "vías de hecho" pueden definirse como comportamientos materiales lesivos de derechos o garantías constitucionales, y/o la ejecución de actos estando pendiente algún recurso administrativo de los que -en virtud de norma expresa- impliquen la suspensión de los efectos ejecutorios de aquél; o que habiendo sido resuelto no hubiesen sido notificados. Cuando se alega la existencia de vías de hecho administrativas, la cuestión litigiosa se centra en determinar si existió una conducta material de la administración pública sin un sustento legal que la legitime.

Corresponde entonces determinar si el organismo ha incurrido en una conducta arbitraria contrariando el principio de legalidad con el que debe obrar la administración pública, sancionando a la amparista sin existir un pronunciamiento concreto y formal de autoridad competente privándola de sus medios defensivos.

De la prueba documental presentada por las partes, en especial del legajo digital de la amparista agregado por AFIP al sistema LEX 100, surge que la administración inicia la



fiscalización de la cooperativa COFARAL a raíz de Nota 496 /2019, en fecha 25/01/2021, para los periodos 9/2016 al 7/2019 (conf. documental adjunta al LEX100 por la demandada, fs. 27 del legajo).

Dicha verificación arroja como resultado la existencia de un incumplimiento por parte de la contribuyente, motivo por el cual se le envía un requerimiento de parte del organismo, que es cumplido por la firma en multinota del 12/03/2021 (fs. 28 del legajo).

A fojas 36 del legajo, el organismo agrega que en fecha 07/12/2021, mediante f8400/L se procedió a notificar a la firma de lo actuado en el expediente administrativo iniciado en su contra, otorgándole un plazo de 10 días para que ésta se pronuncie con respecto la verificación efectuada, lo que fue contestado por la cooperativa en fecha 10/06/22 que no estaba de acuerdo con el ajuste, ante esto AFIP procedió a efectuar una determinación rectificativa automática, la cual fue nuevamente notificada a la contribuyente en fecha 15/07/22, ante lo cual la amparista se limitó a contestar en fecha 19/07/22, que no prestaba conformidad al ajuste.

Finalmente a fojas 37, la agencia de fiscalización concluye la verificación efectuada y comunica a la agencia sede que proceda a confeccionar los formularios f8003 y f8900, a fin de que éste merite la exclusión de la cooperativa del registro.

A su vez en fecha 05/10/22 a través de nota 629/22 (obrante a fs. 23 del legajo, sistema LEX100) se solicita a la dirección de asuntos jurídicos que emita el dictamen jurídico





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE TUCUMAN 1

correspondiente, quien cumple con dicha enmienda en fecha 01/02/23 (conforme obra a fojas 38/51 del legajo, sistema LEX100), concluyendo que corresponde la exclusión del registro de la amparista COFARAL salvo mejor criterio de superioridad, por lo que en fecha 12/09/23, se emite nota 564/23 dirigida a la división de entidades financieras (fs. 52 sistema LEX100) solicitando la intervención de dicha división a los fines de tramitar la exclusión del registro de conformidad a lo establecido en IG-2021-6-E-AFIP-DIISFI#SDGFIS, apartado E pautas procedimentales punto 1,3 Anexo VII.

Del legajo de la cooperativa detallado previamente, puede advertirse claramente que el trámite necesario para la exclusión del registro de la amparista se encuentra inconcluso, habiendo llegado hasta la emisión del dictamen jurídico, pero sin que exista todavía acto administrativo emanado de autoridad competente que pueda evidenciar la voluntad expresa de la administración, por lo que considero que el expediente administrativo analizado se encuentra aún sin resolver.

Asimismo puede verse que tampoco se ha cumplido con lo dispuesto en IG-2021-6-E-AFIP-DIISFI#SDGFIS, apartado E pautas procedimentales punto 1,3 Anexo VII, para la exclusión del beneficiario del “Registro de Beneficios Fiscales en el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y otras Operatorias”, con lo cual surge en forma evidente que, el organismo al dar de baja a la amparista del registro sin acto administrativo previo, y sin haber notificado tal decisión de conformidad a lo establecido en el Art. 13 de la Resolución



General 3900 que establece que: “La exclusión del “Registro” se notificará en el “Domicilio Fiscal Electrónico” del sujeto excluido y tendrá efectos a partir del día inmediato siguiente a aquel en que se efectúe dicha notificación”, se encuentra incurso en una vía de hecho que está prohibida por el Art. 9 de la ley 19.549 de procedimientos administrativos.

No es óbice de lo antes expuesto, la Nota N°498/2022 enviada por el Jefe de la División de Revisión y Recursos de la Dirección Regional de Tucumán a la Dirección de Contencioso, División, Coordinación y Control, informando sobre una excepción de litispendencia que interpuso la cooperativa ante AFIP, solicitando la suspensión de las actuaciones administrativas, hasta tanto recaiga sentencia firme en el juicio por inconstitucionalidad iniciado por COFARAL contra AFIP ante el Juzgado Federal N°1 de Tucumán – Secretaría Civil, bajo el número de expediente 2239 /2021, a cuyo cuerpo me remito en mérito a la brevedad, adjunta por el Dr. Ramasco Padilla al momento de ampliar la contestación de demanda, pues la misma no comprueba la existencia de la notificación requerida para que proceda la exclusión del registro de la amparista, ni que se haya concluido con el procedimiento normado para que ello ocurra.

La notificación de la decisión administrativa de excluir la amparista del registro es de vital importancia, pues es a partir del día siguiente a su notificación es que nacen los recursos administrativos que hacen posible la defensa del administrado, garantizando el debido proceso adjetivo y asegurando la inviolabilidad del derecho de defensa amparado por nuestra carta





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE TUCUMAN 1

magna, pues es a partir de ella que el administrado puede oponer el recurso previsto en el Artículo 74 del Decreto N° 1.397 del 12 de junio de 1979 y sus modificatorios, habilitado en el Art. 15 de la misma RG 3.900.

Es por ello que, si bien el Art. 9° de la RG 3900 establece que la permanencia de la inscripción en el “Registro” estará condicionada a que el contribuyente observe una correcta conducta fiscal, la exclusión del “Registro” deberá ser notificada en el “Domicilio Fiscal Electrónico” del sujeto excluido y tendrá efectos a partir del día inmediato siguiente a aquel en que se efectúe dicha notificación (conf. Art. 13° RG 3900), se trata de una notificación específica, cuya constatación no surge de las pruebas producidas en autos.

Por ello, resulta apropiado especificar que el Estado Nacional siempre debe actuar dentro de los límites de su competencia y de acuerdo a las formas procedimentales que la ley habilita, pues su actuación se encuentra sujeta al principio de legalidad, con mayor razón cuando se trate de la limitación de derechos individuales de claro contenido aflictivo, como son los implicados en el caso bajo examen, donde no se admite el informalismo adoptado al amparo del principio de la especialidad que se utiliza para delimitar la competencia de los órganos administrativos.

En este sentido, cabe recordar que, aun cuando la administración puede declarar unilateralmente la caducidad de un acto administrativo cuando el interesado no cumpliera las condiciones fijadas en el mismo, para ello “...deberá mediar previa



constitución en mora y concesión de un plazo suplementario razonable al efecto” (conf. art. 21 de la ley 19.549). Es útil y conveniente recordar para este caso de suspensión de un beneficio impositivo oportunamente acordado, que la jurisprudencia de la Corte Suprema ha señalado que, no resulta admisible que, a la hora de establecer procedimientos destinados a garantizar la normal y expedita percepción de la renta pública, se recurra a instrumentos que quebrantan el orden constitucional. Es que la mera conveniencia de un mecanismo para conseguir un objetivo de gobierno —por más loable que éste sea— en forma alguna justifica la violación de las garantías y derechos consagrados en la Ley Fundamental. Así, se ha sostenido que es falsa y debe ser desechada la idea de que la prosperidad general constituya un fin cuya realización autorice a afectar los derechos individuales o la integralidad del sistema institucional vigente.

Por lo expuesto precedentemente, considero que se encuentra verificada la existencia de arbitrariedad e ilegitimidad en el proceder del ente fiscal, correspondiendo por tanto hacer lugar a la acción de amparo incoada y, en consecuencia, ordenar a AFIP la inmediata reinserción en el “Registro de Beneficios Fiscales en el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y otras Operatorias” de las cuentas bancarias afectadas de la contribuyente Cooperativa Farmacéutica de Provisión y Consumo Alberdi Ltda. “COFARAL”.

Las costas se imponen a la demandada vencida en autos, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 14 Ley 16.986 de aplicación al caso concreto.





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE TUCUMAN 1

Corresponde en esta instancia proceder a la regulación de honorarios del letrado Dr. Leandro Stok, en representación de la actora, Cooperativa Farmacéutica de Provisión y Consumo Alberdi Ltda. “COFARAL”, por su actuación en el proceso de Amparo.

En efecto, tratándose de una acción de amparo el suscripto comparte el criterio sustentado por la doctrina en el sentido, de que nos encontramos ante un proceso sin contenido económico. Así, Serantes Peña- Palma-Serantes Peña en su obra: “Aranceles de Honorarios para Procuradores y Abogados (pag. 117), nos dice que “siendo la Acción de Amparo un remedio rapidísimo para restaurar un derecho o garantía constitucional presumiblemente conculcado -de la cual se ve privado arbitrariamente-, la regulación de honorarios debe ajustarse a las pautas de valoración profesional contenida en los incisos b) al f) del art. 6, pues la primera -“el monto del juicio”- no se da en éstos, puesto que lo que el Amparo persigue es el reconocimiento de los mencionados derechos y garantías que protege nuestra Carta Magna”.

En consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza de la presente acción de Amparo, de la que no surge monto del proceso como lo exige el art. 21 de la ley 27.423, a los fines de la regulación de honorarios, de conformidad al art. 48, se aplicará las normas del artículo 16 inc. b) al f) de la ley arancelaria, esto es, extensión y calidad de la labor realizada, complejidad, resultado obtenido y trascendencia jurídica, teniendo en cuenta las escalas del art. 20 y 48 que establece un mínimo de 20 (UMA). Que el valor de la UMA vigente al día de la presente regulación es de



\$49.075.- (Cuarenta y Nueve Mil Setenta y Cinco Pesos) conforme Resolución N° 925/24 de la CSJN de fecha 30/04/2024.

Corresponde por tanto regular en concepto de honorarios al Dr. Leandro Stok, por su actuación en los presentes autos, la medida de 12(UMA), correspondientes a la suma de \$588.900 (Quinientos Ochenta y Ocho Mil Novecientos Pesos).-

- Por ello, se

R E S U E L V E :

I)- HACER LUGAR A LA ACCION DE AMPARO solicitada por la Cooperativa Farmacéutica de Provisión y Consumo Alberdi Ltda. “COFARAL” y, en consecuencia, **ORDENAR** a AFIP la inmediata reinscripción en el “Registro de Beneficios Fiscales en el Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y otras Operatorias” de las cuentas bancarias afectadas de la amparista, conforme lo meritado.

II)- COSTAS a la vencida conforme a lo considerado, (Art. 14 Ley 16.986).-

III) REGULAR HONORARIOS al Dr. Leandro Stok, apoderado de la amparista por su actuación en los presentes autos, la medida de 12(UMA), correspondientes a la suma de \$588.900 (Quinientos Ochenta y Ocho Mil Novecientos Pesos).-

H Á G A S E S A B E R .-





Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE TUCUMAN 1



#38477088#414194386#20240530114404156